



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 2982-2004-AA/TC
LIMA
JESÚS DEUDOR GUILLERMO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 18 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Jesús Deudor Guillermo contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 102, su fecha 27 de abril de 2004, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de marzo de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se declare inaplicable la Resolución N.º 0000011825-2001-ONP/DC/DL 19990, de fecha 28 de setiembre de 2001, por aplicar retroactivamente el Decreto Ley N.º 25967; y que, en consecuencia, se le otorgue su pensión de jubilación completa y sin topes, con arreglo al Decreto Ley N.º 19990 y la Ley N.º 25009, más el pago de las pensiones devengadas dejadas de percibir, y los intereses legales. Alega que al momento de solicitar su pensión de jubilación se encontraba dentro de los alcances de la Ley N.º 25009, por tener 56 años de edad y más de 37 de aportaciones, además de haber prestado servicios para la empresa Volcán Compañía Minera S.A.A., Unidad de Carahuacra.

La ONP contesta la demanda manifestando que el demandante, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967, no reunía los requisitos establecidos en el artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990, y que tampoco cumplía con los requisitos de la Ley N.º 25009 para acceder a pensión de jubilación minera.

El Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 de setiembre de 2003, declaró fundada la demanda, considerando que el demandante, a la fecha de su cese, ya había cumplido los requisitos establecidos en la Ley N.º 25009, por lo que el Decreto Ley N.º 25967 fue aplicado indebidamente.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar que el demandante no ha acreditado que, en el ejercicio de sus labores, haya estado expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad para acogerse a los beneficios que otorga la Ley N.º 25009, y que, a la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967, no reunía los requisitos exigidos para el goce de una pensión de jubilación del Decreto Ley N.º 19990.

FUNDAMENTOS

1. El demandante percibe pensión de jubilación adelantada y pretende que se le otorgue una pensión de jubilación minera con arreglo al Decreto Ley N.º 19990, concordante con la Ley N.º 25009, por considerar que se encuentra dentro de los alcances de esta última.
2. Conforme a la legislación que regula la jubilación de los trabajadores mineros, para acceder a la pensión de jubilación no basta haber laborado en una empresa minera, sino acreditar encontrarse comprendido en los supuestos del artículo 1º de la Ley N.º 25009, de jubilación minera, y los artículos 2º, 3º y 6º de su Reglamento, Decreto Supremo N.º 029-89-TR, que establecen, que los trabajadores de centros de producción minera deben reunir los requisitos de edad, aportaciones, trabajo efectivo, y además acreditar haber laborado expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, hecho que no ha sido demostrado con la documentación presentada por el actor, más aún, teniendo en cuenta que del Certificado de Trabajo de fojas 8 se desprende que el demandante se desempeñó en el cargo de Cajero Unidad, no encontrándose, por lo tanto, dentro de los supuestos anteriormente mencionados.
3. De otro lado, se evidencia que cuando empezó a regir el Decreto Ley N.º 25967, el actor contaba 48 años de edad y 30 de aportaciones. Por consiguiente, al 19 de diciembre de 1992, antes de la entrada en vigencia de la norma referida, no cumplía con los requisitos para que su pensión de jubilación sea calculada a tenor del Decreto Ley N.º 19990, verificándose la contingencia el 25 de diciembre de 1999, cuando ya se encontraba en vigencia el Decreto Ley N.º 25967, por lo que esta última disposición le fue correctamente aplicada.
4. Respecto a la pretensión de una pensión de jubilación sin topes, resulta pertinente recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha precisado que con relación al monto de la pensión máxima mensual, los topes fueron previstos desde la redacción original del artículo 78º del Decreto Ley N.º 19990, luego modificados por el Decreto Ley N.º 22847, que estableció un máximo referido a porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley N.º 25967, que retornó a la determinación de la pensión máxima mediante decretos supremos. En consecuencia, desde el origen del Sistema Nacional de



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pensiones, se establecieron topes a los montos de las pensiones mensuales, así como los mecanismos para su modificación.

5. Por consiguiente, de conformidad con la interpretación realizada por este Tribunal de la sentencia del Expediente N.º 007-96-AI/TC, no se ha acreditado que el Decreto Ley N.º 25967 haya sido aplicado retroactivamente, ni tampoco que la resolución impugnada lesione derecho fundamental alguno del demandante, pues se ha demostrado que la pensión de jubilación del actor ha sido liquidada y otorgada de conformidad con la normativa vigente al tiempo de expedirse, por lo que la demanda debe desestimarse.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar **INFUNDADA** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO

Lo que certifico:


.....
Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)